

VACIONES UNIDAS

ASAMBLEA
GENERAL



CONSEJO
DE SEGURIDAD



Distr.
GENERAL

A/36/178

S/14431

9 abril 1981

ESPAÑOL

ORIGINAL: ARABE/INGLES

ASAMBLEA GENERAL

Trigésimo sexto período de sesiones
tema 64 de la lista preliminar*

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE
INVESTIGAR LAS PRÁCTICAS ISRAELÍES QUE
AFECTEN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA
POBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS

UN LIBRARY

MAY 7 1981

CONSEJO DE SEGURIDAD
Trigésimo sexto año

UN/SA COLLECTION

Carta de fecha 7 de abril de 1981 dirigida al Secretario General por el
Representante Permanente de Jordania ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de adjuntar el texto de un memorando en idioma árabe presentado al Director General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, sobre las decisiones de las autoridades israelíes de ocupación y de la Suprema Corte de Israel relativas al apoderamiento de la concesión de la corporación de electricidad de la Gobernación de Jerusalén, que había sido otorgada por el Gobierno de Jordania durante el lapso de unificación de ambas márgenes del Jordán y antes de la ocupación israelí.

En el memorando se hace hincapié en la flagrante violación del derecho internacional y del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 ¹/, cometida al apoderarse de una de las más importantes corporaciones de servicios públicos, que ha estado suministrando energía eléctrica no sólo a Jerusalén sino también a numerosas ciudades y aldeas árabes de toda la zona.

Tengo el honor de solicitar que esta carta se distribuya como documento oficial de la Asamblea General, en relación con el tema 64 de la lista preliminar, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Hazem NUSEIBEH
Embajador
Representante Permanente

* A/36/50.

¹/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, No. 973, pág. 287.

Traducido del árabe

ANEXO

Memorando dirigido al Director General de la Organización
Internacional del Trabajo en Ginebra

Me refiero al memorando que dirigí a usted en enero de 1980 sobre la decisión de las autoridades militares israelíes de ocupación de asumir el control de la Empresa Jordana de Electricidad del Gobierno de Jerusalén; el Ministro de Energía de Israel y el Comandante General militar de la Ribera Occidental ocupada habían dado a conocer, el 30 y 31 de diciembre de 1979, respectivamente, la decisión de asumir el control de la Empresa y traspasar su concesión a la Compañía Regional de Electricidad, empresa israelí.

Desde la agresión cometida el 5 de junio de 1967 y la ocupación de grandes extensiones de tierras árabes por Israel, las autoridades de ocupación han procedido a la anexión de la ciudad de Jerusalén, tras ampliar los límites de su municipalidad a expensas de las tierras árabes ocupadas; haciendo caso omiso de las protestas de la Empresa, Israel considera que ésta ha quedado registrada automáticamente en virtud de la legislación israelí, en contravención de todas las leyes, costumbres, decisiones e instrumentos internacionales y de las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. Desde entonces, las autoridades de ocupación han estado provocando deliberadamente a la Empresa, algunas veces cobrándole la prestación de servicios no obligatorios y otras impidiéndole que obtuviera permisos para adquirir y procurarse las herramientas y la maquinaria que necesitaba para revitalizar sus actividades, aumentar su producción y mejorar sus servicios. Las autoridades de ocupación siguen acusando a la Empresa de incompetencia y desorden en su administración. Están haciendo todo lo posible para apoderarse de la concesión de la empresa con objeto de controlar los servicios económicos vitales de esta ciudad y principalmente esta empresa árabe, considerada la mayor institución económica árabe en toda la Ribera Occidental. Las autoridades de ocupación consideran que la concesión de esta Empresa es uno de los principales obstáculos con que se enfrenta la ofensiva expansionista sionista, cuya finalidad es afianzar su dominio sobre la Ciudad Santa y desligarla de la Ribera Occidental, consolidando así el hecho consumado que han impuesto y sus pretensiones de una Jerusalén unificada, la capital eterna de Israel. Mientras tanto, las autoridades de ocupación se dedican a expropiar vastas extensiones de tierras árabes a sus legítimos dueños, valiéndose de diversos medios de coacción, con objeto de establecer asentamientos sionistas en dichas tierras; muestra de ello son los violentos ataques colonialistas contra estas tierras, particularmente en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza.

El 7 de enero de 1980, los dirigentes y trabajadores de la Empresa se declararon en huelga para expresar su descontento y protestar contra esta decisión arbitraria. Una ola de huelgas laborales y manifestaciones populares se extendió por toda la Ribera Occidental en apoyo de la huelga de los dirigentes y trabajadores de la Empresa y en repudio de la decisión adoptada por las autoridades, cuya revocación se pidió.

/...

El Consejo de Administración de la Empresa recurrió a la Suprema Corte de Israel para pedirle que dictara una orden provisional contra la decisión del Ministro de Energía de Israel y del Comandante General militar israelí de la Ribera Occidental. El 16 de febrero de 1981, la Corte adoptó una decisión que se considera un precedente en la interpretación de la ley, al arrogarse el derecho de dividir en dos partes la concesión de la Empresa. Al denegar la petición del Consejo de Administración de la empresa de que anulara la decisión del Ministro de Energía de asumir el control de la concesión de la Empresa en la Jerusalén árabe ocupada so pretexto de que dicha Empresa estaba sujeta a la legislación israelí, la Corte dictó una orden definitiva en que impidió al Comandante General militar asumir el control de la concesión de la Empresa en la Ribera Occidental, sujeta a la legislación de Jordania, debido a que se trataba de un territorio ocupado y, en consecuencia, sujeto al derecho internacional. En su decisión, la Corte ordenó al Ministro de Energía que reconsiderara su decisión de asumir el control de la Empresa y que atendiera a la solicitud del Consejo de Administración de la Empresa a este respecto. La Corte se preguntaba si era posible establecer una distinción técnica entre las instalaciones y propiedades de la Empresa en la Jerusalén árabe ocupada, por una parte, y sus instalaciones y propiedades en la Ribera Occidental, por la otra.

La decisión de las autoridades militares israelíes de ocupación de asumir el control de la mencionada Empresa, al igual que la decisión de la Suprema Corte de Israel, son nulas por los motivos siguientes:

I. 1) Conforme al derecho y las decisiones, costumbres y acuerdos internacionales y en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, la ocupación militar no entraña como consecuencia el traspaso de la propiedad del territorio ocupado al Estado ocupante mientras no haya terminado la guerra, ni culmina en un acuerdo sobre la anexión del territorio por el Estado ocupante. El Estado ocupante no puede legalmente declarar en forma unilateral su anexión de un territorio como resultado de su ocupación de dicho territorio. Tal declaración, si se produce, no tiene validez jurídica debido a que la anexión es legítima únicamente si es convenida al momento de concertarse la paz. En consecuencia, el Estado al que pertenece un territorio conserva sus derechos soberanos respecto de dicho territorio;

2) Existe todavía un estado de guerra entre Jordania e Israel y, basándose en lo señalado en el párrafo 1 de la sección I, Jordania conserva todavía sus derechos de soberanía en la Ribera Occidental ocupada y, en particular, en la ciudad árabe ocupada de Jerusalén, que es parte inseparable de los territorios árabes ocupados. Esto se suma a la negativa de toda la comunidad internacional a reconocer la decisión de las autoridades militares de ocupación israelíes de anexionar la ciudad de Jerusalén tras la agresión del 5 de junio de 1967, negativa expresada, en particular, en las resoluciones 2253 (ES-V), de 4 de julio de 1967, y 2254 (ES-V), de 14 de julio de 1967, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en general, en todas las resoluciones sobre este tema. El caso de la Empresa Jordana de Electricidad de Jerusalén es parte inseparable de la cuestión de Jerusalén y los demás territorios árabes ocupados y, por ese motivo, las autoridades de ocupación no deben injerirse en los asuntos de esa Empresa, causarle

perjuicios o apoderarse de ella; además, sobre la base de los fondos y propiedades del Estado, los municipios y los particulares del territorio ocupado no deben estar expuestos a confiscación, expropiación o pillaje en general.

A la luz de lo anterior, ¿es acaso permisible que Israel se valga del pretexto de su legislación interna para eludir la responsabilidad internacional que le incumbe por la violación de las disposiciones del derecho y la costumbre internacionales en los territorios árabes ocupados? ¿Es permisible que Israel se sitúe, en virtud de su legislación, por encima de las normas del derecho y la costumbre internacionales para consagrar su agresión, su ocupación y su confiscación y ulterior judaización de los bienes árabes?

II. La decisión de la Suprema Corte de Israel se basó en elementos políticos, porque el rasgo principal de esa decisión tenía un matiz político acorde con la línea política mantenida por el Gobierno militar de ocupación israelí con respecto a la judaización de los territorios árabes ocupados; y este matiz es incompatible con la competencia de la Corte para plicar la ley y hacer justicia, de la que los israelíes se han jactado durante mucho tiempo para convencer a otros de su rectitud. La Suprema Corte debiera haberse basado en consideraciones puramente jurídicas y haber obedecido únicamente a esas consideraciones, y no haberse identificado con la línea política de su Gobierno, en particular, la política de anexión y confiscación de tierras con el propósito de judaizarlas. Como ya hemos señalado, la decisión establecía una distinción entre la Jerusalén árabe ocupada, por una parte, y la Ribera Occidental ocupada, por la otra, y facilitaba al Gobierno asumir el control de la concesión de la Empresa en Jerusalén occidental, basándose en el supuesto de que la Empresa estaba sujeta a las leyes israelíes. Además, desde el punto de vista jurídico, práctico y técnico, es imposible dividir y fragmentar la concesión de la Empresa, porque la concesión fue otorgada a una persona jurídica y es indivisible, como también es uno e indivisible el territorio operacional de la concesión.

III. El otorgamiento o retiro de la concesión o el derecho a enajenarla es un acto de soberanía que sólo puede realizar el Estado que goza de soberanía jurídica en el territorio de la concesión. Desde el punto de vista del derecho internacional y de todas las costumbres, instrumentos y decisiones internacionales, y a los ojos de la comunidad internacional, Israel no es el Estado que posee la soberanía jurídica, sino un Estado ocupante que ocupa territorios ajenos por la fuerza militar. Por lo tanto, Israel no tiene derecho a disponer de la concesión de la Empresa, porque el otorgamiento de la concesión para este servicio indispensable es el verdadero ejercicio de la soberanía, ya que la concesión adquiere validez solamente después de su ratificación y confirmación por ley. La promulgación de la ley es un acto realizado, por razón de su soberanía legítima, por el Gobierno del Estado interesado, en este caso el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania. En consecuencia, la Empresa de Electricidad del Gobierno jordano de Jerusalén es una empresa establecida y registrada con arreglo a la ley jordana y es, por lo tanto, jordana por su nacionalidad y por derecho jurídico. Así fue señalado en la Gaceta Oficial de Jordania, No. 1072, de 19 de junio de 1951, suplemento No. 1 a 1262, de 16 de febrero de 1956, y en los acuerdos de 1957 y 1962

entre el Gobierno de Jordania y la Empresa, y a ello se hizo referencia en la Ley No. 37 (1963) y la Ley Provisional No. 21 (1967), relativa a la Dirección Jordana de Electricidad. Sin embargo, el ejercicio de los derechos y la soberanía de Jordania quedaron temporalmente suspendidos a partir de la agresión de 1967 por causa del estado de ocupación creado por Israel.

Dado que esta cuestión es de la competencia de la Organización Internacional del Trabajo en la medida en que afecta a las tres partes laborales (el Gobierno de Jordania, los accionistas de la Empresa, representados por su Consejo de Administración, y los empleados y trabajadores de la Empresa), habida cuenta de la declaración contenida en la Constitución de la Organización, en el sentido de que la paz universal y duradera puede establecerse solamente si está fundada en la justicia social, y de las palabras de la Declaración de Filadelfia, en el sentido de que todos los seres humanos, cualquiera que sea su raza, religión o sexo, tienen el derecho a la búsqueda de su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades, y recordando la resolución No. 9 de la Conferencia Internacional del Trabajo, de 1974, sobre la política de discriminación racial y violación de las libertades y derechos sindicales que aplican las autoridades israelíes en Palestina y los territorios árabes ocupados, y la resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo, de 1980, sobre los efectos de los asentamientos israelíes en Palestina y los demás territorios árabes ocupados sobre la situación de los trabajadores árabes, le pedimos encarecidamente que intervenga de inmediato en apoyo de la postura del Gobierno de Jordania, el Consejo de Administración de la Empresa y los empleados y trabajadores árabes, que es una postura de decisivo rechazo de la política de confiscación y judaización. Manifestamos a usted la profunda inquietud que nos inspiran las consecuencias directas e indirectas de la política de confiscación y judaización de los servicios económicos en los territorios árabes ocupados para la situación de los trabajadores y empleados árabes, en particular los empleados y trabajadores de esta Empresa, que está considerada la más importante de las empresas económicas de valor vital de la Ribera Occidental ocupada. Le pedimos encarecidamente que, por los medios que estima apropiados y en el marco de la Constitución y el reglamento de la Organización Internacional del Trabajo, haga todo lo posible por apoyar la postura de Jordania representada por las tres partes, el Gobierno y los propietarios y trabajadores de la Empresa, para impedir la pérdida de esta Empresa y poner término a todas las medidas adoptadas con arreglo a tan arbitraria decisión que, como hemos señalado anteriormente, es incompatible con todas las leyes, costumbres y decisiones internacionales. Nos reservamos el derecho de defender nuestros derechos por los medios que estimemos apropiados en futuros períodos de sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.

Jawad AL-ANANI
Ministro de Trabajo
